

«RIT»

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado de Letras de Osorno
CAUSA ROL : C-1974-2023
CARATULADO : SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E
INTÉRPRETES MUSICALES/SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTION LTDA.

Osorno, veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro

VISTOS:

Carlos Arturo Gómez Ramírez, Abogado, domiciliado en Edificio Bertín de calle O'Higgins N° 535, 2º Piso, Oficina 201, Osorno, en representación de la **SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTÉRPRETES MUSICALES**, SCD, entidad de Gestión Colectiva de Derechos Intelectuales, regida por las disposiciones del Título V de la Ley N° 17.336, según mandato judicial, que se acompaña en un otrosí, representada por su Director General, don Juan Antonio Durán González, ingeniero civil, ambos domiciliados en Condell N° 346, Providencia, Santiago, correo electrónico carlosgomezabog@gmail.com, a US. respetuosamente digo: **I.- ANTECEDENTES.** La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD, antes Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD, conforme a las autorizaciones concedidas por Resoluciones N°s. 3.891 y 2.608 del Ministerio de Educación, publicadas en el Diario Oficial del 10 de octubre de 1992 y 23 de junio de 1994, respectivamente, es una entidad de gestión colectiva que cuenta con la autorización de funcionamiento a que se refieren los artículos 91 y siguientes de la Ley N° 17.336, Sobre Propiedad Intelectual. De acuerdo a lo expuesto, SCD está autorizada para realizar la gestión colectiva de los derechos de autor y conexos de los autores, compositores, artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y demás titulares de derechos que representa, tanto nacionales y extranjeros, para la administración del derecho de comunicación pública de las obras musicales, con o sin texto, sincronizados o no en obras audiovisuales, teatrales y coreográficas, y fonogramas, que constituyen el repertorio de SCD, el cual consta en el Registro Público que, de acuerdo al Art. 102 de la Ley, se lleva en el domicilio de mi representada. **II.- DEMANDA** En conformidad a los derechos y atribuciones que la ley concede a SCD, vengo en demandar a **SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA**, cuyo giro es, entre otros, la instalación y explotación comercial de restaurantes, representada indistintamente por don **Marcos Aurelio Cárdenas Troquian**, RUT N° 12.754.875-7 o don **Alberto Genaro Ávila Cifuentes**, RUT N° 14.404.933-0, comerciantes, domiciliados en Ramírez N° 774, Osorno, para que se declare que ha infringido la Ley de Propiedad Intelectual por el uso no autorizado de obras musicales del repertorio de SCD, y se le condene a indemnizar los perjuicios, pagar las multas legales y poner término a la utilización ilegal en el local público denominado "**Restaurant Pub La Cabaña**", ubicado en la misma dirección antes señalada. **III.- LOS HECHOS** En efecto, desde a lo menos el 1º de junio de 2019 a la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TTKXQGHKSS

fecha, en el local público antes individualizado, se utilizan, comunicándolas al público, obras musicales del repertorio representado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, sin haber obtenido su autorización, ni menos individualmente de cada uno de los titulares de los derechos de autor y conexos, mediante el empleo de diversos medios o procedimientos, entre los cuales pueden mencionarse receptores de radio, televisión, fonogramas y altavoces. La definición del concepto de “comunicación pública” fue introducida en la letra v) del art. 5° de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual por el art. 20 de la Ley N° 19.912, publicada en el Diario Oficial de fecha 4 de noviembre de 2003, como: *“todo acto, ejecutado por cualquier medio o procedimiento que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, actualmente conocido o que se conozca en el futuro, por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin distribución previa de ejemplares a cada una de ellas, incluyendo la puesta a disposición de la obra al público, de forma tal que los miembros del público puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.”* Esta definición tiene la calidad de norma interpretativa y conforme a ello, se entiende incorporada con efecto retroactivo a la Ley N° 17.336. **IV.- OBLIGACIÓN DE AUTORIZACIÓN PREVIA.** La autorización para utilizar el repertorio de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD, debe ser previa al inicio de tal utilización, la cual se otorga mediante la concesión de una Licencia específica, conforme lo disponen los arts. 17 a 21, 67, 91 y 100 de la Ley N° 17.336, en relación a los artículos 11 y 11 bis del Convenio de Berna, publicado en el Diario Oficial el 5 de junio de 1975. A la entidad de gestión colectiva demandante, de acuerdo al art. 100 de la Ley N° 17.336, sólo le está permitido otorgar la autorización o licencia bajo contraprestación del pago de una Tarifa General aplicable al local en cuestión o bien aplicando una tarifa especial pactada con la respectiva asociación de usuarios, que en el caso de autos corresponde a la tarifa especial acordada en el Convenio suscrito entre SCD y la Federación Gremial de la Industria Hotelera y Gastronómica de Chile, “HOTELGA”, de fecha 9 de noviembre de 1992, según cuyos parámetros aplicables al local de la demandada, esto es, Tipo de Establecimiento; Categoría y Tamaño, le correspondería pagar mensualmente la tarifa de 2.63 Unidades Musicales Mensuales, “U.M.M.”, más un 50% por derechos conexos, siendo el valor actual de dicha Unidad la cantidad de \$31.226.-, todo lo cual se traduciría en una tarifa mensual de \$82.124.-, más un 50% por derechos conexos. La parte demandada, pudiendo haberlo hecho, pues no requiere ser miembro de Hotelga, no ha solicitado a la fecha firmar la licencia que la autorizaría a comunicar públicamente obras musicales del repertorio SCD a cambio del pago de la tarifa especial, en base al Convenio suscrito entre SCD y “HOTELGA”, por lo que mi representada sólo está en posición de exigirle la tarifa general. La utilización no autorizada de obras, que son el resultado de un acto de creación



sobre los cuales el autor tiene el derecho de propiedad intelectual, entendido en una doble vertiente: moral o incorporal y patrimonial, configurado éste como la facultad exclusiva de aquél de obtener una remuneración compensatoria por la explotación de su creación, constituye una infracción, según lo dispuesto en el artículo 79 letra a), en relación al artículo 18 de la citada Ley, por lo que interpongo demanda de indemnización de perjuicios en su contra. Igual autorización es necesaria para la utilización de fonogramas, que, de no encontrarse concedida al utilizador, lo hace incurrir en una infracción, según lo establecido en el artículo 79 letra b), en relación al artículo 67 de la Ley. **V.- INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS** La parte demandada, al infringir las disposiciones de la Ley N° 17.336 señaladas precedentemente, por no haber requerido la autorización legal para utilizar obras musicales en el establecimiento denominado “Restaurant Pub La Cabaña”, ha privado a los autores, compositores, artistas y productores de la remuneración que legítimamente les habría correspondido, conforme a la tarifa general que se indica a continuación, por lo que deberá ser condenada a pagar a título de indemnización de perjuicios, a lo menos, el monto de dicha tarifa. La tarifa general mensual aplicable al local materia de esta demanda, respecto de los períodos comprendidos entre junio de 2019 a junio de 2023, asciende al 1,25% de sus ingresos brutos mensuales por derechos de autor, más un 50% por concepto de derechos conexos, en conformidad a lo dispuesto en los Títulos II, N° 10, y III de las Tarifas Generales de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, (Publicadas en el Diario Oficial los días 13 de febrero y 27 de octubre, de 1993), en relación a lo dispuesto en el art. 2° transitorio de la Ley N° 19.166, 2° y 4°, letra d) del Reglamento de Arancel para el Cobro del Derecho de Ejecución (Publicado en el Diario Oficial el 29 de enero de 1973 y el 24 de abril de 1975). Asimismo, la parte demandada deberá ser condenada a indemnizar también, a lo menos, la tarifa general mensual indicada precedentemente, por los períodos mensuales que transcurran entre el 1° de julio de 2023 hasta el término del juicio, en caso de que la utilización del repertorio de SCD subsista por parte de la demandada. **VI.- MULTAS** Atendido que la utilización del repertorio de obras musicales representado por SCD se efectúa sin su autorización, hechos que constituyen infracciones a la Ley N° 17.336, se solicita a SS. se condene a la demandada al pago de la multa establecida en el artículo 78 de la citada Ley. **VII.- SUSPENSIÓN DE LA UTILIZACIÓN NO AUTORIZADA** La actividad ilegal que realiza las partes demandadas en perjuicio de los autores, compositores, artistas, productores y demás titulares de los derechos de autor y conexas, chilenos y extranjeros, representados por esta Corporación, debe cesar en el más inmediato término, en cuya virtud se demanda la suspensión de la utilización no autorizada. **POR TANTO**, en mérito de lo expuesto en los arts. 85 J, 91 y siguientes, y demás citados de la Ley N° 17.336 y del Convenio de Berna, en relación a los arts. 173, 680 y siguientes del C.P.C. y 2314 del Código Civil; **RUEGA**; se sirva tener por interpuesta la presente demanda en



juicio sumario por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual y de indemnización de perjuicios, en contra de Sociedad Integral de Gestión Limitada, representada indistintamente por don Marcos Aurelio Cárdenas Troquian o don Alberto Genaro Ávila Cifuentes, ya individualizados, y en definitiva acogerla, declarando que la demandada ha infringido la Ley de Propiedad Intelectual por haber utilizado el repertorio de obras musicales y fonogramas representado por SCD, sin su autorización previa, desde junio de 2019 a junio de 2023, condenándola a lo siguiente: 1) A pagar a mi representada, a título de indemnización, la tarifa general mensual del 1,25% de los ingresos brutos mensuales del local denominado “Restaurant Pub La Cabaña”, más un 50% por derechos conexos, en relación a los períodos comprendidos entre junio de 2019 a junio de 2023. 2) A pagar a la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, por el mismo concepto y tarifa mensual indicada precedentemente, por los períodos comprendidos entre el 1º de julio de 2023 en adelante y hasta el término del juicio o de la utilización ilícita. 3) A cancelar el reajuste del monto de la tarifa mensual demandada, respecto de los períodos demandados a título de indemnización de perjuicios, según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre el día 1º de cada mes adeudado y el último día del mes anterior al de su pago efectivo. 4) A pagar todo lo anterior, con los intereses que correspondan, contados desde el día 1º de cada período de tarifa mensual a que se le condene, conforme a los petitorios precedentes, hasta el día de su pago efectivo. 5) A pagar una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales, prevista en el artículo 78 de la Ley N° 17.336, o la que US. se sirva fijar. 6) A poner término a la actividad infractora, esto es, la utilización no autorizada del repertorio de SCD. 7) Sin perjuicio de lo anterior, en subsidio, y de acuerdo al mérito del proceso, a lo que US. se sirva determinar, conforme a derecho. Todo lo anteriormente demandado según los montos que se liquiden en la etapa del cumplimiento del fallo o, a expresa solicitud de mi parte, en la etapa procesal pertinente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 85 K de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. 8) Al pago de las costas de la causa.

La parte demandante rectificó la demanda, en el sentido de hacer presente que el correcto nombre del local comercial del demandado es RESTAURANT TORO DE SANGRE, manteniéndose el mismo demandado, Sociedad Integral de Gestión Limitada, RUT 76.079.960-.2, representada indistintamente por Don Marcos Aurelio Cárdenas Troquian, RUT 12.754.875 7 o Don Alberto Genaro Ávila Cifuentes, RUT 14.404.933 0, comerciantes, domiciliados en Ramírez N° 774, Osorno.

La demanda fue notificada en conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil a SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTION LTDA., representada por Marcos Aurelio Cárdenas Troquian, o Alberto Genaro Ávila Cifuentes.



Se realizó audiencia de contestación y conciliación, a través de videoconferencia, con la presencia de la demandante SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTÉRPRETES MUSICALES, representada por el abogado Carlos Arturo Gómez Ramírez; y el abogado Iván Marcelo Ruperthus Puschel, en calidad de agente oficioso de la demandada SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA. Se contestó la demanda a través de minuta escrita, en el siguiente tenor: IVÁN MARCELO RUPERTHUS PUSCHEL, Abogado, cédula de identidad N° 10.490.773-3, domiciliado para estos efectos en calle Eleuterio Ramírez N° 952, Oficina 56, de la ciudad de Osorno, en representación de “SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA”, Rut 76.079.960-2, representada legalmente por don MARCOS AURELIO CÁRDENAS TROQUIAN, en autos sobre infracción ley 17.336, causa Rol C-1974-2023, caratulados “SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTERPRETES NACIONALES con SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA”, señala: **Que, en tiempo y forma vengo en oponer las siguientes excepciones dilatorias:** 1.- La contemplada en el artículo 303, N° 2 del Código de Procedimiento Civil, esto es “la falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre”, en virtud de los antecedentes que paso a exponer: La personería para representar a la demandante no se encuentra debidamente acreditada, el mandato fue otorgado a don Carlos Arturo Gómez Ramírez, con fecha 18 de enero del año 2010, habiéndose otorgado su última vigencia el día 3 de diciembre del año 2019, habiendo transcurrido más cuatro años, en consecuencia el mandato exhibido para representar a la demandada resulta insuficiente para acreditar la personería. 2. La contemplada en el artículo 303, N° 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es “la ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo proponer la demanda”, en virtud de los antecedentes que paso a exponer: La demandante señala que mi representada le debería haber pagado mensualmente la cantidad de 2.63 Unidades Musicales Mensuales, más un 50% por derechos conexos, siendo el valor de dicha unidad la cantidad de \$ 31.226, todo se traduciría en una tarifa mensual de \$82.124, más un 50% de derechos conexos, posteriormente al demandar indemnización de perjuicios no se señala a que título sería dicha indemnización, limitando a señalar la tarifa mensual aplicable al local materia de esta demanda respecto de los periodos comprendidos entre Junio del 2019 a junio del 2023, asciende al 1.25% de sus ingresos brutos mensuales por derechos de autor, más un 50%, por concepto de derechos conexos, finalmente agrega los periodos entre el 1 de Julio de 2023, hasta el término del juicio, se hace presente que en ninguna partes e hace mención a las cantidades exactas que están cobrando, siendo incomprensible el detalle señalado. POR TANTO, RUEGA., tener por interpuestas excepciones dilatorias, solicitando sean acogidas en todas sus partes. **En forma subsidiaria se viene en contestar la presente demanda** por infracción a la ley 17.336, conforme a los fundamentos de hecho y



derecho que paso a exponer: 1.- Que, efectivamente mi representado durante los primeros meses del año 2019, funcionó como Pub Restaurant. Sin embargo, al contar con patente comercial de “*Cabaret*”, solo se presentaban grupos musicales o solistas en vivo, no utilizando obras musicales del repertorio representado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes musicales. 2.- Posterior a ello debemos recordar, como es de conocimiento público, que por efectos de pandemia (Covid 19), no se pudo continuar funcionando, viéndose obligado a cerrar, como todos los locales de este tipo a nivel nacional. Llegando el año 2021, mi representado abre nuevamente, pero esta vez exclusivamente como “*Restaurant*”, al contar también con esta patente comercial, conocido con el nombre “Toro de Sangre”, dedicándose solo a la venta de comida en horas del día, en consecuencia, no era necesario comunicar ningún tipo de obras musicales, y en general ningún tipo de música. 3.- En consecuencia, no ha existido infracción a la ley de propiedad intelectual por el uso no autorizado de obras musicales del repertorio SCD. Adicionalmente no se dan en la especie ninguno de los requisitos que establece la ley para determinar la responsabilidad para ser condenado al pago de una indemnización de perjuicios, ya que el proceder de mi representado ha sido lícito y de buena fe. POR TANTO, RUEGA, tener por contestada la demanda de indemnización de perjuicios por infracción a la ley 17.336, solicitando sea rechazada en todas sus partes con expresa condenación en costas. Se tuvieron por opuestas excepciones dilatorias; se confirió traslado. Se tuvo por contestada la demanda, en forma subsidiaria. Atendida la solicitud de las partes, se suspende la audiencia, y se fija fecha para su continuación.

Se realizó continuación de audiencia, a través de videoconferencia, con la presencia de la demandante SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTÉRPRETES MUSICALES, representada por el abogado Carlos Arturo Gómez Ramírez; y la demandada SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA, representada por el abogado Iván Marcelo Rupertus Puschel. La demandante evacuó traslado a través de minuta escrita en el siguiente tenor: En relación a las excepciones opuestas por la contraria, vengo en contestar el traslado que me fuera conferido, solicitando el rechazo de las mismas, con costas, conforme a las siguientes consideraciones: 1) Supuesta falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre. La contraria sostiene, sin ningún basamento, que la personería del suscrito (que la misma contraria, paradójicamente, procede a detallar en su escrito) no se encuentra debidamente fundamentada, aduciendo tan solo a la fecha del último certificado de vigencia de la escritura pública de la cual emana el mandato judicial. Lo cierto es que tal contrato se mantiene vigente, puesto que no han operado ninguna de las formas que establece el Código Civil en su artículo 2163 y siguientes para darle término. A mayor abundamiento, si acaso la razón que esgrime la contraria fuese suficiente para fundamentar la excepción que



pretende oponer, a juicio del suscrito, S.S. no habría dado curso a la demanda en primer lugar, cuestión que con justa razón no ocurrió. Si se revisan las disposiciones que al efecto contempla el Código Orgánico de Tribunales, en especial, aquellas relativas a las escrituras públicas, podrá concluir que el requisito de acreditación de vigencia del mismo no existe como tal y no constituye una condición que afecte su calidad de instrumento público. Si la demandada pretende que el instrumento acompañado a los autos no se encuentra vigente, es ella la llamada a probar la efectividad de sus aseveraciones, por lo que solicitamos se rechace de plano esta excepción. 2) Supuesta ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo proponer la demanda. Al respecto, la contraria pretende hacer creer que la demanda es inepta por no contener una exposición clara del petitorio de la misma, esto, en relación a la indemnización de perjuicios solicitada. Esta afirmación carece de todo fundamento, ya que la simple lectura del libelo, tanto en el capítulo II.- DEMANDA, capítulo IV.- OBLIGACIÓN DE AUTORIZACIÓN PREVIA y en el capítulo V.- INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, se da cuenta pormenorizada de los antecedentes de hecho y de derecho que constituyen el sustrato fáctico y jurídico de la pretensión indemnizatoria que se ha hecho valer. En efecto, la contraria yerra al sostener que SCD demanda a su representada el pago de una tarifa mensual de \$ 82.124, más un 50% de derechos conexos, pues el acápite IV.- deja en claro que dicho monto correspondería a una tarifa especial, producto del convenio suscrito entre SCD y HOTELGA, a la cual la demandada podría adherirse de haber suscrito una licencia con SCD. No siendo ese el caso, lo que el libelo detalla en su acápite V.- es el pago de la tarifa general exigible a un usuario de música infractor que no cuenta con la autorización de la entidad de gestión colectiva de derechos intelectuales correspondiente -mi representada-; esto es, un 1,25% de sus ingresos brutos mensuales por concepto de derechos de autor, más un 50% por concepto de derechos conexos, en conformidad a lo dispuesto en los Títulos II, N° 10, y III de las Tarifas Generales de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. La referencia que en la demanda se ha hecho al Tarifario SCD obedece a la circunstancia que los perjuicios que se han ocasionado a mi representada, como consecuencia de la actividad ilícita de la infractora, ascienden, a lo menos, al monto de la tarifa aplicable al establecimiento de comercio que explota Sociedad Integral De Gestión Ltda, tarifa o arancel de carácter mensual que se encuentra determinado por los ingresos brutos mensuales del local, en conformidad al Tarifado vigente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, publicado en el Diario Oficial. En consecuencia S.S., no es efectivo lo afirmado por la incidentista al fundar la excepción que promueve, ya que en la demanda se señala expresamente la base de cálculo a ser aplicada, esto, el porcentaje del 1,25% de los ingresos brutos resultantes de la explotación del negocio, y sólo se requerirá precisar, dentro del curso del procedimiento, a cuánto ascienden dichos ingresos, por consiguiente, el monto exacto de los perjuicios



que deberían ser resarcidos. Tal actividad probatoria, que se traduce, entre otras actuaciones, en una eventual solicitud de exhibición de documentos y de peritaje contable, obedece al ejercicio de un derecho consagrado en nuestra legislación, cual es el art. 120 del C.O.T., norma que señala textualmente: *“Cualquiera de las partes puede, en los casos en que el valor de la cosa disputada no aparezca esclarecido por los medios indicados en este Código, hacer las gestiones convenientes para que dicho valor sea fijado antes de que se pronuncie la sentencia.”* *“Puede también el tribunal dictar de oficio las medidas y órdenes convenientes para el mismo efecto.”* Es precisamente ese el derecho que esta defensa hará valer dentro del curso del proceso, a fin de determinar el monto de los perjuicios que se cobran, lo cual desvirtúa de modo categórico la afirmación de la contraria. Luego, señala el demandado que *“[...], posteriormente al demandar indemnización de perjuicios no se señala a que título sería dicha indemnización, [...]”*; la demanda en juicio sumario incoada en contra de SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA persigue que ésta le pague a SCD, a título de indemnización de perjuicios, la tarifa que ha dejado de percibir por concepto de comunicación pública de música aplicable al giro restaurant, por el establecimiento “Restaurant Toro de Sangre”; en este sentido es que se hace mención a las tarifas referidas precedentemente, pues, en definitiva, lo que se demanda es el 1,875% de los ingresos brutos mensuales que la demandada percibe por concepto de explotación comercial del establecimiento individualizado (1,25% de sus ingresos brutos mensuales por concepto de derechos de autor, más un 50% por concepto de derechos conexos). Esta tarifa que se ha dejado de percibir es, naturalmente y sin lugar a dudas, lo que constituye el daño emergente producto del actuar contrario a Ley del demandado, requisito de toda indemnización de perjuicios, por lo que desde este punto de vista no hay tal infracción a la exigencia del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil en relación con la excepción del artículo 303, N° 4 del Código de Procedimiento Civil interpuesta. Así las cosas, es claro, S.S., lo que se está pidiendo a título de indemnización de perjuicios. Finalmente, esta excepción es contradictoria con lo sucesivo del escrito de la contraria, pues esta ha contestado la demanda sin mayor problema, según da cuenta la minuta de contestación agregada al proceso, lo cual no habría sido posible si esta fuera ininteligible. Por estos argumentos es que esta incidencia debería culminar, necesariamente, en el rechazo de la excepción planteada por la contraria. POR TANTO, SOLICITA, tener por evacuado el traslado dentro de plazo, negando lugar, con costas, a las excepciones dilatorias opuestas. El Tribunal tiene por evacuado el traslado de las excepciones dilatorias. SE LLAMÓ A LAS PARTES A CONCILIACIÓN Y NO HUBO ACUERDO.

Se recibió la causa a prueba, mediante resolución que se notificó en formal legal a las partes.

La parte demandante produjo la siguiente prueba:



«RIT»

- Documental de folios 1, 40, 44 y 45.
- Percepción y exhibición documentales de folios 58, 60 y 66.

La parte demandada produjo la siguiente prueba:

- Documental de folio 52.
- Testimonial de folio 67.

Se decretó como medida para mejor resolver informe de peritos, a evacuar por el Contador Público Auditor Ramón Cárcamo Cárcamo.

Se tuvo por no decretada la medida para mejor resolver,

Se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DILATORIA DE FALTA DE PERSONERÍA.

PRIMERO: *“TERCERO: Que, en dicho sentido, conviene señalar que las excepciones dilatorias son aquellas que tienden a corregir el procedimiento, sin afectar el fondo de la acción deducida. En consecuencia, todas las alegaciones que busquen fundar alguna de las excepciones contenidas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, deben decir relación con aspectos formales del procedimiento y no respecto a asuntos de fondo, los que por su naturaleza, requieren de un proceso de lato conocimiento en el cual las partes puedan presentar pruebas, formular alegaciones, y en definitiva, presentar antecedentes a fin de que el tribunal se pronuncie sobre la materia sometida a su conocimiento”. (I. Corte de Apelaciones de Santiago, rol 7.340- 2.006, 18 de enero de 2.008).*

SEGUNDO: El artículo 303 del Código de Procedimiento Civil señala que *“Sólo son admisibles como excepciones dilatorias: (...) 2° La falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre.”* *“La lectura de este precepto demuestra, a la simple vista, que él contempla tres situaciones diversas: falta de capacidad del demandante; falta de personería del que comparece en su nombre; y falta de representación legal del que comparece en su nombre.”* (Manual de Derecho Procesal, tomo IV, Mario Casarino Viterbo, Editorial Jurídica de Chile, p. 27)

TERCERO: El artículo 6 del Código de Procedimiento Civil señala que *“El que comparezca en juicio a nombre de otro, en desempeño de un mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento, deberá exhibir el título que acredite su representación. Para obrar como mandatario se considerará poder suficiente: 1° El constituido por escritura pública otorgada ante notario o ante oficial del Registro Civil a quien la ley confiera esta facultad; 2° el que conste de un acta extendida ante un juez de letras o ante un*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TTKXQGHKSS

juez árbitro, y suscrita por todos los otorgantes; y 3° el que conste de una declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa (...)”.

CUARTO: *“CUARTO: Que, el mandato judicial es un contrato solemne que se rige por las reglas generales del derecho civil y que, además, está reglamentado en el Título II del Libro I del Código de Procedimiento Civil, cuyo inciso 1° del artículo 6° de dicho texto señala que: "El que comparezca en juicio a nombre de otro, en desempeño de un mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento, deberá exhibir el título que acredite su representación". El mandato judicial constituye una excepción a la regla general - el mandato es un contrato consensual tal como se desprende del artículo 2123 del Código Civil -, ya que es un contrato solemne y la forma de constituirlo está reglamentada en el artículo 6° del Código de Procedimiento Civil. Así, el mandato judicial puede constituirse en tres formas, a saber: a) Por escritura pública otorgada ante Notario o ante Oficial del Registro Civil a quien la ley confiera esta facultad. Según el artículo 86 de la Ley N° 4.808, sobre Registro Civil, son los Oficiales del Registro Civil de las comunas que no sean asiento de un notario quienes están facultados para autorizar poderes judiciales; b) Por medio de un acta extendida ante un juez de letras o ante un juez árbitro y suscrita por todos los otorgantes; c) Por medio de una declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa, siendo esta la forma más corriente de constituir el mandato judicial. (...) En lo que refiere a la duración del mandato, todo procurador legalmente constituido conserva su carácter de tal mientras en el proceso no haya testimonio de la expiración de su mandato. Es lo que dispone el inciso 1° del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil. De manera que si en el proceso no hay testimonio de la causa por la cual el mandato haya expirado, éste se entiende vigente para todos los efectos legales.” (I. Corte de Apelaciones de Concepción, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, Rol N° 83-2021)*

QUINTO: La delegación de poder de SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR al abogado CARLOS ARTURO GOMEZ RAMIREZ consta en escritura pública repertorio 1.544 de la Notaría Benavente de Santiago, de 18 de Enero de 2.010. En ella se señala que JUAN ANTONIO DURÁN GONZÁLEZ fue designado Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, con poder suficiente para representar a dicha Corporación *“en todos los juicios o gestiones judiciales ante cualquier tribunal ordinario, especial, arbitral, (...) así intervenga la Corporación como demandante, demandada o tercero de cualquier especie, (...) con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial, en los términos previstos en los artículos séptimo y octavo del Código de Procedimiento Civil, (...)”*. En la cláusula tercera se especifica que *“por este instrumento viene a delegar las facultades transcritas a CARLOS ARTURO GOMEZ RAMIREZ, para que represente a la Sociedad Chilena del Derecho de*



Autor en todo juicio relacionado directa o indirectamente con el cobro del pequeño derecho de autor o derecho de comunicación pública y conexos, ante los Tribunales de la Provincia de Osorno, (...)”. Y el 3 de Diciembre de 2.019 se certificó que no hay nota alguna que revoque, rescilie o deje sin efecto el acto de que da cuenta esa escritura pública.

SEXTO: Además, en folio 2 del cuaderno principal Secretaría del Tribunal acreditó el poder del abogado Carlos Arturo Gómez Ramírez, para representar judicialmente a SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTERPRETES MUSICALES; según mandato judicial repertorio 1.544-2.010 de la Notaría René Benavente Cash de Santiago. Tal constancia, de un Ministro de Fe, es suficiente, en principio, para comprobar que dicho abogado tiene personería para actuar en el juicio, en nombre de SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTERPRETES MUSICALES.

SÉPTIMO: En adición, la demandada SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA basó la excepción dilatoria de falta de personería en una hipótesis y no en un hecho. En efecto, señaló que el mandato fue otorgado el 18 de Enero del año 2.010, que su última vigencia se otorgó el 3 de Diciembre del año 2.019, y que no constaba si se encontraba vigente en la actualidad. Más, no afirmó que dicho mandato hubiera sido revocado o anulado, y tampoco acompañó antecedentes de que eso hubiera sucedido. En consecuencia, y a la luz de la normativa y jurisprudencia expuestas, y de la certificación de Secretaría, surge que el mandato judicial otorgado al abogado Carlos Arturo Gómez Ramírez se encuentra vigente. Así, la excepción dilatoria de falta de personería es improcedente, pues no se funda en una circunstancia o hecho, sino que, en una hipótesis, es decir, en una suposición, no acreditada.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DILATORIA DE INEPTITUD DEL LIBELO.

OCTAVO: *“Para que la excepción de ineptitud del libelo, consagrada en el N° 4 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, pueda ser aceptada, se requiere que la demanda presente ausencias que la hagan inepta, en otras palabras, mal formulada, ininteligible o vaga. Luego, acontece que la excepción debe basarse en circunstancias de importancia, relevancia o significación, y de no hacerlo, no podrá prosperar.”* (Corte de Apelaciones de Copiapó, Rol Civil N° 57-2020, treinta y uno de agosto de dos mil veinte)

NOVENO: La lectura de la demanda o libelo permite concluir que no es inepta, toda vez que contiene los requisitos legales para trabar el litigio. En efecto, exige una indemnización porque SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTERPRETES MUSICALES experimentó daño patrimonial a consecuencia de que la parte demandada efectuó uso no autorizado de obras musicales. Y aunque no pidió el pago de sumas de dinero en moneda de curso legal, sí señaló las bases para



calcularlas. Así, indicó que *“La parte demandada, pudiendo haberlo hecho, no ha solicitado a la fecha firmar la licencia que la autorizaría a comunicar públicamente obras musicales del repertorio SCD a cambio del pago de la tarifa especial, en base al Convenio suscrito entre SCD y “HOTELGA”, por lo que mi representada sólo está en posición de exigirle la tarifa general”*; que *“La tarifa general mensual aplicable al local materia de esta demanda, respecto de los períodos comprendidos entre junio de 2019 a junio de 2023, asciende al 1,25% de sus ingresos brutos mensuales por derechos de autor, más un 50% por concepto de derechos conexos”*; que *“Asimismo, la parte demandada deberá ser condenada a indemnizar también, a lo menos, la tarifa general mensual indicada precedentemente, por los períodos mensuales que transcurran entre el 1º de julio de 2023 hasta el término del juicio, en caso de que la utilización del repertorio de SCD subsista por parte de la demandada”*; y, en la conclusión, que *“Todo lo anteriormente demandado según los montos que se liquiden en la etapa del cumplimiento del fallo o, a expresa solicitud de mi parte, en la etapa procesal pertinente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 85 K de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual”*.

DÉCIMO: En consecuencia, es improcedente la alegación de que la demanda no señala el título en virtud del cual exige indemnización de perjuicios, o de que no existe claridad sobre las cantidades que se demandan. Como se dijo, el título de la indemnización es la Ley 17.336, que otorga derecho para demandar sumas de dinero por daño causado a consecuencia de uso no autorizado de obras musicales. Y los montos exigidos dicen relación con la Tarifa General Mensual, aplicada a los ingresos brutos de quien usó las obras musicales sin permiso, recargada en un 50 %; y por todo el periodo cobrado. Así es improcedente exigir señalamiento de sumas específicas, pues dependen del monto de ingresos brutos, en el caso, de SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA. En concordancia, la parte demandada comprendió la demanda, pues la contestó, esto es, ejerció derecho a defensa. Por todo lo anterior, la excepción de ineptitud del libelo es improcedente.

EN CUANTO A LA DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.

UNDÉCIMO: El artículo 1 de La Ley 17.336, sobre propiedad intelectual, dispone que *“La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.”* El artículo 5 dice que *“Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: (...) v) Comunicación pública: todo acto, ejecutado por cualquier medio o procedimiento que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes,*



actualmente conocido o que se conozca en el futuro, por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin distribución previa de ejemplares a cada una de ellas, incluyendo la puesta a disposición de la obra al público, de forma tal que los miembros del público puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”. El artículo 18 dice que “Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas: a) Publicarla mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión, representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición, y, en general, cualquier otro medio de comunicación al público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro; b) Reproducirla por cualquier procedimiento; c) Adaptarla a otro género, o utilizarla en cualquier otra forma que entrañe una variación, adaptación o transformación de la obra originaria, incluida la traducción, y d) Ejecutarla públicamente mediante la emisión por radio o televisión, discos fonográficos, películas cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte material apto para ser utilizados en aparatos reproductores de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier otro medio. e) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley. Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido”. El artículo 19 refiere que “Nadie podrá utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor. La infracción de lo dispuesto en este artículo hará incurrir al o los responsables en las sanciones civiles y penales correspondientes.” El artículo 67 precisa que “El que utilice fonogramas o reproducciones de los mismos para su difusión por radio o televisión o en cualquiera otra forma de comunicación al público, estará obligado a pagar una retribución a los artistas, intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, cuyo monto será establecido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 100. El cobro del derecho de ejecución de fonogramas a que se refiere este artículo deberá efectuarse a través de la entidad de gestión colectiva que los represente.” El artículo 78 expresa que “Las infracciones a esta ley y su reglamento no contempladas expresamente en los artículos 79 y siguientes, serán sancionadas con multa de 5 a 50 unidades tributarias mensuales”. El artículo 79 señala que “Comete falta o delito contra la propiedad intelectual: a) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18. b) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice las interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos, con cualquiera de los fines o por cualquiera



de los medios establecidos en el Título II. (...) Las conductas señaladas serán sancionadas de la siguiente forma: 1. Cuando el monto del perjuicio causado sea inferior a las 4 unidades tributarias mensuales, la pena será de prisión en cualquiera de sus grados o multa de 5 a 100 unidades tributarias mensuales. 2. Cuando el monto del perjuicio causado sea igual o superior a 4 unidades tributarias mensuales y sea inferior a 40 unidades tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 20 a 500 unidades tributarias mensuales. 3. Cuando el monto del perjuicio sea igual o superior a 40 unidades tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales".. El artículo 67 dispone que "El que utilice fonogramas o reproducciones de los mismos para su difusión por radio o televisión o en cualquiera otra forma de comunicación al público, estará obligado a pagar una retribución a los artistas, intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, cuyo monto será establecido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100. El cobro del derecho de ejecución de fonogramas a que se refiere este artículo deberá efectuarse a través de la entidad de gestión colectiva que los represente. La distribución de las sumas recaudadas por concepto de derecho de ejecución de fonogramas se efectuará en la proporción de un 50% para los artistas, intérpretes o ejecutantes, y un 50% para el productor fonográfico. El porcentaje que corresponda a los artistas, intérpretes o ejecutantes se repartirá de conformidad con las siguientes normas: a) Dos tercios serán pagados al artista intérprete, entendiéndose como tal el cantante, el conjunto vocal o el artista que figure en primer plano en la etiqueta del fonograma o, cuando la grabación sea instrumental, el director de la orquesta. b) Un tercio será pagado, en proporción a su participación en el fonograma, a los músicos acompañantes y miembros del coro. c) Cuando el artista intérprete sea un conjunto vocal, la parte que le corresponda, según lo dispuesto en la letra a), será pagada al director del conjunto, quien la dividirá entre los componentes, por partes iguales". Y el artículo 85 K establece que "El titular de un derecho podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción".

DUODÉCIMO: "CUARTO: Que, la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual, dispone la protección de la propiedad intelectual, determinando que el derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros. Luego dispone el artículo 19, que "Nadie podrá utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor. La infracción de lo dispuesto en este artículo hará incurrir al o



los responsables en las sanciones civiles y penales correspondientes". Añade esta ley lo que se entiende por autorización, como "el permiso otorgado a una persona por el titular del derecho de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de alguno de los modos y por alguno de los medios que establece la ley", estando dicha persona obligada al pago de una remuneración, que se fijará contractualmente o en la forma que establezca el Reglamento, a los titulares de los derechos de autor o de derechos conexos, o a sus representantes. QUINTO: Que, de esta manera la demandante, como representante de los autores, está autorizada para realizar la gestión colectiva de los derechos de autor y conexos de los autores, compositores, artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y demás titulares de derechos que representen, tanto nacionales y extranjeros, para la administración del derecho de comunicación pública de las obras musicales, que constituyen el repertorio de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor." (I. Corte de Apelaciones de Arica, Rol N°185-2.022 Civil, 10 de Agosto de 2.022.)

DÉCIMO TERCERO: La demandada SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA contestó que durante los primeros meses del año 2.019 funcionó como Pub Restaurant; que se presentaban grupos musicales o solistas en vivo; que no utilizaban obras musicales del Repertorio representado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales; que durante la Pandemia no pudo funcionar; y que en 2.021 abrió nuevamente, pero como "Restaurant", para la venta de comida, sin que fuera necesario comunicar algún tipo de obra musical.

DÉCIMO CUARTO: De acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1.698 del Código Civil "*Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta*". En concreto, la parte demandante debía probar que la demandada SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA comunicó al público obras musicales de su Repertorio en el "Restaurant Toro de Sangre". Para probar dicha circunstancia acompañó al proceso 4 fotografías del interior del local, que evidencian la existencia de televisores encendidos, en un caso, aparentemente con imágenes de un videoclip musical. Y, asimismo, adjuntó la Carta del local que, además, ofrece arriendo del salón para eventos especiales, pues señala que "*Contamos con patente de alcoholes, restaurante, discoteque y cabaret con respecto a espectáculo artístico (significa que después de la cena se puede bailar, tener algún show, cantante, bailes, grupos folclóricos, entre otros)*".

DÉCIMO QUINTO: Por su parte, la demandada presentó a las testigos Jenifer Marcela Monje Herrera y Catalina Enedina Cárdenas Pávez. La primera, señaló que "*Bueno, la música, no escuchábamos mucha música en realidad, cuando yo trabaja era en el turno de temprano y escuchábamos las noticias y colocábamos la televisión y si había algún tipo de música también era de la televisión. Entonces, no*



era como de eso, porque anteriormente fue discotec y ahí si ocupábamos música, pero estoy hablando antes del 2017 y eso después se cerró y después vino un periodo que estuvimos en pandemia y tampoco se utilizaba música, si se atendía de lejos”; que “se escuchaba, HTV, o sea los del cable, pagábamos VTR”; que el televisor estaba encendido “Casi todo el turno, el televisor siempre está prendido.”; que “colocábamos, también colocábamos música en vivo, entonces cuando iba una persona a tocar música se le cancelaba”; “canciones como populares, rock chileno.” Por su parte, Catalina Enedina Cárdenas Pávez manifestó que “Yo trabajé durante el 2.023 y me comentaron sobre el tema de la música que había y vengo a decir lo que sé, el conocimiento, de yo trabajé ahí.”; que “Nosotros colocábamos los canales de música, como los MTV, también colocábamos partidos de futbol, las noticias, a la hora del almuerzo, a la hora de la tarde, que es como, iban más familias. Entonces colocábamos la televisión y los canales”; que “Son 4 televisores y esos como que se sincronizan en el local”.

DÉCIMO SEXTO: Así, los antecedentes son suficientes para concluir que la demandada SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA ha operado el local Restaurant Toro de Sangre, en que ha comunicado y ofrecido al público obras musicales del Repertorio representado por SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTÉRPRETES MUSICALES, de autores chilenos y extranjeros; en español u otros idiomas; en vivo o a través de la televisión; y sin permiso de la Sociedad o de los autores de las obras. En efecto, ha presentado espectáculos musicales en vivo; compartido televisión con programas musicales; u ofrecido música para bailes o “shows”. Es decir, ha utilizado obras musicales de dominio ajeno, para mejorar la oferta de restaurante, que opera; obras protegidas por dicha Ley, y sin estar facultada expresamente por SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTÉRPRETES MUSICALES o sus autores. En complemento, la parte demandada no probó que la música comunicada no estaba amparada por el Repertorio representado por SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTÉRPRETES MUSICALES.

DÉCIMO SÉPTIMO: “Sexto: Que, es conveniente reconocer que a partir del momento en que las autoridades gubernamentales decidieron tomar medidas para afrontar la pandemia del Coronavirus COVID-19, concretamente ordenando el aislamiento preventivo obligatorio, la restricción de la libre circulación, reunión y desarrollo de actividades económicas, ha tenido por consecuencia una alteración en la actividad económica y social del país. Una de esas consecuencias es la limitación, legal o de facto, para el desarrollo de actividades comerciales declaradas no esenciales por el Gobierno. A raíz de estos impactos negativos han surgido múltiples interrogantes jurídicos, sobre todo encaminados a tratar de buscar respuestas para los contratos civiles y mercantiles en ejecución, en los cuales los deudores, a causa de estas restricciones, enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones, dado que se han visto impedidos de desarrollar sus



particulares giros comerciales y consiguiente merma de ingresos con los cuales dar solución a aquéllas, como sucedió con los arrendatarios de oficinas o locales comerciales, de giros no esenciales. Noveno: Que, para efecto de lo que se resolver, conviene dejar asentado desde ya, que según parámetros legales y jurisprudenciales el COVID-19 cumple, en general y en abstracto, con los tres requisitos del caso fortuito: imprevisibilidad, irresistibilidad de un hecho exterior. La doctrina especializada así lo ha considerado. (V. Tapia R. Mauricio: “Caso fortuito o fuerza mayor”, 3° edic. Edit. Thomson Reuters, Santiago, 2020, p. 181). (...) A su turno, las medidas restrictivas de la autoridad, como las cuarentenas obligatorias, eventualmente podrían llegar a considerarse en algunas situaciones como caso fortuito. En efecto, si bien podría llegar a pensarse que en esta situación se verifican algunos de los requisitos del caso fortuito - ser una situación causada por un hecho ajeno a la voluntad del deudor y la imprevisibilidad - habrá que distinguir los casos en que a causa de dicha situación la ejecución de la obligación contractual se torna imposible o si la dificultad es simplemente relativa (...). Décimo sexto: Que, en las condiciones antes dicha, la limitación para el desarrollo de ciertas actividades comerciales, de esparcimiento, productivos y de construcción o prohibición de estas, dispuesta por la autoridad administrativa destinada a mitigar o impedir los contagios por COVID-19, configura una anomalía de la cosa, de tipo jurídica, que integra el supuesto de hecho referido a la calidad de la cosa arrendada reglado por el artículo 1932 del Código Civil.” (Excma. Corte Suprema, Rol N 49.739-2021, 1 de Agosto de 2.022)

DÉCIMO OCTAVO: “En lo que se refiere a la determinación de los hechos la argumentación sobre los mismos se ha de fundar en la prueba rendida, sin embargo, y tal como advierte destacada doctrina, los distintos sistemas procesales dejan fuera de la necesidad de prueba a determinados hechos, tales como (...) los hechos notorios, es decir, aquellos que son conocidos (o pueden llegar a serlo) por las partes y el juez en tanto que son miembros de una comunidad en la que éstos son públicos y forman parte de la cultura social media. La característica esencial del hecho notorio, es “su pertenencia a esas nociones y conocimientos que denominamos “cultura”, estos en la posición de Calamandrei: pueden ser utilizados sin temor por el juez, porque “el control y la crítica (de este conocimiento) se han llevado ya a cabo fuera del proceso”. (El rol del Juez en la evaluación de la argumentación probatoria, Carolina Ramírez Reyes y Hugo Espinoza Castillo, <https://academiajudicial.cl/wp-content/uploads/2022/11/Ramirez-Espinoza.-El-rol-del-juez-en-la-evaluacion-de-la-argumentacion-probatoria..pdf>)

DÉCIMO NOVENO: Conforme a lo expuesto; al DECRETO N° 4, de fecha 08 de Febrero de 2.020, que DECRETA ALERTA SANITARIA POR EL PERÍODO QUE SE SEÑALA Y OTORGA FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE INDICA POR



EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) POR BROTE DEL NUEVO CORONAVIRUS (2019-NCOV); al DECRETO N° 104, de fecha 18 de Marzo de 2.020, que DECLARA ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE, POR CALAMIDAD PÚBLICA, EN EL TERRITORIO DE CHILE; y a la RESOLUCIÓN N° 203, de fecha 25 de marzo de 2.020, que DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19; puede concluirse que es hecho público y notorio que el país estuvo bajo estado de “*Excepción Constitucional de Catástrofe*” a consecuencia de Pandemia COVID-19, entre el 18 de marzo de 2.020 y el 30 de Septiembre de 2.021. Eso trajo aparejada la restricción de libertades, el aislamiento preventivo obligatorio, la restricción de los derechos a la libre circulación, reunión y el desarrollo de actividades económicas, a efectos de evitar la propagación del virus.

VIGÉSIMO: Así, puede concluirse que la demandada SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA no pudo operar el Restaurant Toro de Sangre entre el 18 de marzo de 2.020 y el 30 de septiembre de 2.021, por lo que tampoco estuvo en situación de comunicar al público obras musicales del Repertorio representado por SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTORES E INTÉRPRETES MUSICALES. Además, esa circunstancia fue señalada por las testigos, quienes dijeron que “*el local estaba cerrado antes, por la pandemia*”, “*2020 y 2021, también estuvo cerrado, como 19 meses*”.

Y VISTO ADEMÁS los artículos 1.437, 1.438, 1.698, 1.699, 1.700 y 1.712 del Código Civil; 144, 160, 170 y 303 del Código de Procedimiento Civil; y Ley 17.336, sobre propiedad intelectual, se resuelve que:

SE RECHAZAN LAS EXCEPCIONES DILATORIAS de falta de personería, y de ineptitud del libelo.

SE ACOGE PARCIALMENTE LA DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS y, en consecuencia, se condena a la demandada **SOCIEDAD INTEGRAL DE GESTIÓN LIMITADA** a indemnizar a la demandante **SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTÉRPRETES MUSICALES** por el uso no autorizado de obras musicales del Repertorio, conforme a la Tarifa General Mensual, ascendente a 1,25 % de los Ingresos Brutos Mensuales, más un recargo del 50 %; por los periodos habidos entre los meses de Junio de 2.019 a Febrero de 2.020, Octubre de 2.021 a Junio de 2.023, y Julio de 2.023 hasta el término de dichos usos; más reajustes, según la variación que hubiera experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el día 1 de cada mes adeudado y el último día del mes anterior al pago efectivo, e intereses corrientes desde que esta sentencia esté firme; a liquidar en la etapa de cumplimiento de la sentencia; a pagar una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales; y



«RIT»

a terminar la utilización no autorizada de las obras musicales; con costas.

Notifíquese personalmente o por cédula, para el caso de que no fuera notificada de otra forma.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Osorno, veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TTKXQGHKSS